

cienda el Tribunal competente para dictar esa resolución, ha violado con sus procedimientos una de las garantías que consigna el art. 16 constitucional.

Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la república, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Puebla, en 24 de Agosto del presente año, y se declara: que la justicia de la Unión ampara y protege al C. Lic. Joaquín Ruiz, contra los procedimientos coactivos de la Jefatura superior de hacienda en el Estado, que han dado origen á este recurso, sin perjuicio de las legítimas facultades del C. Juez de Distrito, á quien ha pasado el conocimiento del negocio, para proceder con respecto á él, en la forma prescrita por las leyes.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revisión, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*José Arteaga.*—*José María Lozano.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*José María Vigil.*—*Miguel Sandoval.*—*Simon Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa*, secretario

Es copia que certifico. México, 7 de Enero de 1876.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido por D. Adolfo O'Ryan ante el juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan que le exige pago de derechos por introducción de cincuenta y dos tercios de mantas, procedentes de la fábrica de Jauja.*

### PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal se ha impuesto del escrito por medio del cual el Sr. D. Adolfo O'Ryan, intenta el recurso de amparo contra los actos del ciudadano Administrador de la aduana terrestre, que le retiene cincuenta y dos tercios de mantas del país y le exige pago de alcabala sobre esas mantas, fundando sus procedimientos en el decreto expedido por el Ejecutivo de Sinaloa con fecha 12 de Abril próximo pasado, alegando el quejoso violación de los artículos constitucionales 16 y 27 y desobediencia al precepto de la fracción 9ª artículo 72 de la Constitución.

El ocurrente dice, que se le expropia de la gracia que por ocho años contados desde 1869 gozan las mantas del país, conforme á las leyes de la Legislatura de Sinaloa, y en cuanto á la violación del artículo 16, dice que el decreto citado, no obliga por haber sido expedido por el Gobernador, contraviniendo lo preceptuado por la Constitución general en su artículo 50: y añade, que se desobedece la fracción 9ª del artículo 72 y la ley general de 2 de Mayo de 1868.

Por falta del informe de la autoridad ejecutora, el fiscal se concreta á examinar la validez del decreto de 17 de Abril último; y en su concepto, el amparo debe otorgarse.

Con efecto, la contravención del artículo 50 del Código fundamental es evidente, pues el gobernador del Estado, siendo solo ejecutivo, expide disposiciones con carácter

de ley, y aun cuando en algunas circunstancias dicho funcionario puede, según la Constitución local, dictar leyes en hacienda y guerra, estas circunstancias no han ocurrido en el presente caso, y por lo tanto ese decreto no puede tener fuerza de ley, atentas la Constitución general y la del Estado, siendo en consecuencia incompetentes las autoridades ó empleados que traten de ejecutar el tal decreto.

Por lo expuesto, el fiscal concluye pidiendo, como ya indicé, que ese juzgado otorgue al Sr. O'Ryan el amparo que ha solicitado contra los actos del administrador de la Aduana terrestre, que le retiene cincuenta y dos tercios de mantas y le cobra alcabala, violando los artículos 16 y 27 de la Constitución federal y quebrantando el art. 72, fracción 9ª de la misma; pues no estando gravadas las mantas de Sinaloa conforme á la ley del Congreso de la Unión fecha 2 de Mayo de 1868, las de otros Estados no pueden ser gravadas en este.

Mazatlan, Mayo 17 de 1875.—L. Gaona.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Mazatlan, Mayo 22 de 1875.

Visto el juicio promovido por D. Adolfo O'Ryan, vecino de esta ciudad, solicitando amparo del acto del Administrador de la aduana terrestre de este puerto, que le detiene cincuenta y dos tercios mantas del país, procedentes de la fábrica de hilados de Jauja en el Distrito de Tepic, por negarse el quejoso á pagar cuarenta centavos por pieza de treinta y dos varas, que le exige como derecho de alcabala, en virtud de un decreto expedido por el Ejecutivo del Estado en 12 de Abril último, por creer que tal hecho viola en su persona las garantías consignadas en los artículos 16 y 27 de la Constitución, y porque dicho decreto viola la garantía consignada en la fracción 9ª del artículo 72 de la misma, y su ley reglamentaria de 2 de Mayo de 1868: el informe de la autoridad ejecutora que admite la deten-

ción y cobro alegados por el quejoso, y la apoya en el decreto á que éste se refiere, y alega sobre la procedencia del recurso intentado, diciendo que es de desecharse el parecer del Ciudadano promotor fiscal, que coincidiendo con la opinion manifestada por el quejoso, pide se conceda el amparo solicitado; y todo lo demas que de autos consta y ver convino:

Considerando: Primero: que el decreto del Ejecutivo de Sinaloa de 12 de Abril último derogando la ley de 1º de Abril de 1873, expedida por la legislatura del Estado, debidamente sancionada y publicada, é imponiendo un derecho de alcabala á las mantas, es un acto extrínsecamente legislativo que no puede legalmente ejercer, por prohibir el artículo 50 de la Constitución, se reúnan en una persona dos ó mas de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial ó se deposite el legislativo en un solo individuo. Segundo: Que la ley en virtud de la cual el ejecutivo se ha creído autorizado á expedir dicho decreto, es condicional y le sujeta, al reformar las tarifas, á hacerlo con vista de las disposiciones que las modifican, lo que sea necesario para el desarrollo y prosperidad del comercio y la industria y de que se fije prudentemente un plazo para que las nuevas tarifas rijan; ninguna de dichas condiciones se ha cumplido en dicho decreto; pues que impone una contribucion á una manufactura antes libre por tiempo determinado, lo que ciertamente no tiende al desarrollo y prosperidad del comercio y la industria: deroga una ley que declaraba libres á ciertas manufacturas por ó durante un término de años en ella expresados y que aun no espira, lo que no es proceder en vista de las disposiciones que modifican la tarifa; y no señala plazo alguno para su ejecucion, haciéndola vigente desde luego; y habiendo cedido las facultades delegadas, (suponiéndolas delegables) ha obrado sin autoridad y su disposicion no obliga la obediencia del quejoso.

Tercero: Que las facultades constitucio-

nales que distinguen á los poderes supremos de la Union y á los de los Estados, no son delegables, pues si tal fuera, podria el Congreso en una sesion, delegar al ejecutivo la facultad de legislar, y así cambiaria el sistema de gobierno que hemos adoptado, cuya condicion absoluta y bien marcada de los tres ramos del poder soberano y la imposibilidad de que dos ó mas puedan reunirse en una sola persona ó corporacion, ó el legislativo se deposite en un individuo; y si la conveniencia que es en política la primer razon, (para los políticos) ha hecho pasar desapercibidos algunos casos en que el ejecutivo ha legislado, ni esto puede servir de precedente legal, ni se intenta en dichos casos el recurso judicial que ahora se entabla. Cuarto: Que la Constitucion de Sinaloa autoriza en efecto al Congreso para investir al ejecutivo con facultades extraordinarias en hacienda y guerra, en casos de invasion extranjera ó perturbacion del orden público (fraccion 13 art. 30;) pero ni ha ocurrido extremo alguno de los mencionados, ni el decreto impugnado pertenece estrictamente á ninguno de los dos ramos, ni tal investidura implica necesariamente la facultad de legislar, ni esta es delegable.

Quinto: Que la legislatura de Sinaloa al conceder la exencion de derechos de alcabala á las mantas del país, usaba de un derecho y cumplia con un deber que el Congreso constituyente creyó de suficiente importancia para consignarlo, como lo hizo, en el art. 124 de la Constitucion; y al decretar la contribucion de dos pesos por telar, imponia una contribucion directa, puesto que es una cuota fija sobre determinado objeto, sin referencia al uso que de él se haga, ó el producto que de él se obtenga, en lo que tambien usaba de un legítimo derecho; pero el decreto impugnado derogando dicha ley y estableciendo de nuevo la alcabala, convierte en exencion de contribuciones directas lo que la ley derogada establecia como exencion de alcabalas, y como las mantas fabricadas fuera del Estado no pueden que-

dar exentas de contribuciones directas, en los lugares de su manufactura, porque así lo mande el ejecutivo de Sinaloa cuya jurisdiccion no va allende los límites de su Estado, y si tendrian que pagar la alcabala impuesta por dicho decreto; resultaria que estas pagarian y las del Estado solo pagarian lo mismo que antes pagaban como contribucion directa, es decir, dos pesos por telar, bajo el nombre de alcabala ó iguala de alcabalas, y tal hecho constituye una restriccion onerosa en el comercio de Estado á Estado, patentizado en el preámbulo de dicho decreto impugnado, que dice se da para cortar algunos inconvenientes que entorpecen actualmente el progreso de la industria algodouera en el Estado, y en la práctica de dicha ley, restriccion prohibida por la ley general de 2 de Mayo de 1868, basada en la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion.

Sexto: Que la Constitucion y leyes del Congreso de la Union que dimanar de ella, son la ley suprema de toda la Union, y á las que deben arreglarse los jueces segun el art. 126 de la primera y el art. 28 de la ley de 20 de Enero de 1869, que reglamenta los arts. 101 y 102 de la misma.

Sétimo: Que el administrador de rentas al detener los efectos del quejoso y al requerirlo el pago de derechos que le exige, le molesta en sus posesiones sin mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y por consiguiente viola en él la garantía consignada en el art. 16 de la Constitucion.

Octavo: Que siendo el decreto impugnado, dado sin autoridad, es inútil tomar en consideracion un efecto que no tiene respecto á la violacion alegada por los quejosos.

Con fundamento de lo expuesto y del art. 101 de la Constitucion y ley que lo reglamenta de 20 de Enero de 1869.—Se declara:

Primero: La justicia de la Union ampara y preteje á D. Adolfo O' Ryan vecino

de Mazatlan en el Estado de Sinaloa, del acto del administrador de la aduana terrestre de dicho puerto que le retiene cincuenta y dos tercios de manta del país procedentes de la fábrica de «Jauja» en el Distrito de Tepic, por negarse el primero á pagar cuarenta centavos por pieza de treinta y dos varas de manta que le cobra como alcabala, sin estar debidamente autorizado.

Segundo: Hágase saber; sáquense las copias de estilo para su publicacion y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para su revision. Así definitivamente juzgando lo decretó y firmó de acuerdo con el parecer del asesor el C. Alonso Morgado, tercer suplente del juzgado de Distrito Sinaloa, por ante mí.—Doy fé.—*Alonso Morgado.*—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia. Mazatlan, Mayo 24 de 1875.  
*Francisco Medina*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte  
de Justicia.*

México, Octubre 29 de 1875.—Visto el juicio de amparo promovido por D. Adolfo O' Ryan, ante el juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan, que le exige por pago de derechos por introduccion de cincuenta y dos tercios mantas procedentes de la fábrica de Jauja, sita en Tepic, cuarenta centavos por cada pieza de treinta y dos varas, siendo así que á las mantas que se elaboran en el Estado de Sinaloa, solo se les cobran á razon de dos pesos mensuales como iguala por telar: y que estos derechos se le cobran en virtud de una ley expedida por el ejecutivo del Estado, investido de facultades extraordinarias por la ley núm. 96 de 11 de Noviembre de 1874, otorgadas por la legislatura del mismo, con cuyo acto considera el quejoso que se vulneran en su persona las garantías que otorgan los arts. 16, 27, 50, 72 y 112 constitucionales. Visto el informe produ-

cido por la autoridad responsable del acto reclamado; la prueba rendida por el promotor fiscal; la sentencia que con dictámen de asesor pronunció el juez tercero suplente de Distrito de Sinaloa, y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, se decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos la referida sentencia que declaró que la justicia de la Union ampara y protege á D. Adolfo O' Ryan, contra el acto del ciudadano administrador de la aduana terrestre de Mazatlan, que le retiene unos tercios de manta, por negarse á pagar cuarenta centavos por cada pieza de treinta y dos varas, y por carecer de autorizacion legal para ello.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Tomo.

Así por unanimidad respecto de la infraccion de los arts. 72 y 112, y por mayoría respecto de la infraccion de los demas artículos, lo proveyeron los ciudadanos presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*José Arteaga.*—*José María Lozano.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*J. M. Vigil.*—*Miguel Sandoval.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Francisco de Paula Ramos.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 16 de 1875.—*Enrique Landa*, secretario.